



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:                      Ordinario Laboral  
Radicación:                05001-31-05-004-2018-00475-01  
Demandante:              Marina del Socorro Quiroz Tamayo  
Demandado:                Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A.  
Asunto:                      Apelación  
Procedencia:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín  
Magistrada ponente:     Sandra María Rojas Manrique  
Temas:                      Pensión de sobrevivientes, dependencia económica  
madre respecto de su hija

**Medellín, abril veintitrés (23) de dos mil veintiuno (2021)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte demandada, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MARINA DEL SOCORRO QUIROZ TAMAYO en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., Radicado 05001-31-05-004-2018-00475-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora MARINA DEL SOCORRO QUIROZ TAMAYO, instauró demanda ordinaria laboral en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., pretendiendo se condene a la demandada, a pagarle la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su hija Catherine Quiroz Tamayo, cuya muerte fue ocasionada por un accidente de origen profesional, acaecido el 5 de septiembre de 2017, intereses moratorios o indexación.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que Catherine Quiroz Tamayo es hija de la demandante y falleció el 5 de septiembre de 2017, siendo su muerte calificada por la demandada, como un accidente de trabajo, explicando que la causante vivió al lado de su madre, sin contraer matrimonio, ni tener hijos, velando económicamente por la actora, ya que todo su salario era destinado al hogar de su madre, quien no percibe ningún ingreso económico.

Explica que la familia de la actora, es de escasos recursos económicos, que la accionante se desempeñó atendiendo un hogar del ICBF, teniendo un ingreso de medio salario mínimo, asumiendo del mismo valor la seguridad social, lo que no le ha generado recursos que le permitan vivir dignamente, pues sufre además de graves enfermedades como trastorno afectivo bipolar y tiroides, debiendo retirarse de su trabajo, debido a sus problemas de salud, siendo la causante, la persona que siempre le suministró los recursos económicos que requería, pues el padre de ésta, no respondió por ella y abandonó el hogar.

Agregó que el 12 de marzo de 2018, solicitó a la accionada la pensión de sobrevivientes, procediendo la misma, el 26 de abril de la misma anualidad, a negarla, argumentándose que no existía dependencia económica de tal entidad, que tuviera la virtualidad de radicar en cabeza de la petente, la calidad de

beneficiaria, afirmando que la demandada, exige, para que la accionante sea beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, que exista dependencia total y absoluta, respecto de la causante, tema éste que no se exige de esta manera, agregando que el hecho de que la accionante apareciera como cotizante en salud, no la hace independiente económicamente, teniendo ahora muchos problemas, ya que ni siquiera tiene garantizado su mínimo vital.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., dio respuesta a la demanda, indicando que es cierto que la muerte de la afiliada, fue calificada como de origen laboral; en cuanto a la dependencia económica alegada, afirma que estableció que el sostenimiento del hogar de la actora, no se encontraba a nombre de la causante, pues ésta era una joven de veinte años, que apenas llevaba cinco meses como trabajadora independiente para el Hospital San Juan de Dios de Ituango y hasta el 31 de marzo de 2016, estuvo afiliada a su representada, como estudiante de práctica por cuenta de la empresa Centro de Sistemas de Antioquia S.A.S., lo que implica que no existía dependencia económica.

Adujo que no es cierto que la causante viviera con la demandante, ya que, según la información suministrada por el empleador de la causante, desde abril de 2017, la misma había sido asignada al puesto de salud de la vereda Santa Lucía, debiendo pernoctar allí. Agrega que la demandante es propietaria de tres inmuebles, de los cuales percibe ingresos como arrendadora, los que se encuentran ubicados en el municipio de Ituango, además, según lo indicado por la misma interesada, su lugar de residencia es en la casa de una de sus hijas, llamada Adriana Patricia Correa Quiroz, en el barrio las Margaritas de Itagüí. La causante no tenía inscritos en el régimen de salud.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en cabeza de la demandante; inexistencia del derecho reclamado por autosuficiencia y falta de subordinación económica de la demandante que desconfigura la dependencia económica por cuenta de su hija; buena fe y prescripción.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 26 de noviembre de 2020, el Juzgado de conocimiento condenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, por el fallecimiento de Catherine Quiroz Tamayo, a partir del 05 de septiembre del 2017, con los valores retroactivos calculados hasta el último día hábil de noviembre, que ascendieron a \$34.143.119, así como que a partir del día 01 de noviembre de 2020, la demandada continúe pagando una mesada de \$877.803, por trece mesadas, con afiliación obligatoria al sistema de salud y sus descuentos que se autorizan desde el mismo momento en que sea disfrutada la pensión; absolvió a la demandada de los intereses moratorios y de la solicitud de imposición de costas; declaró no probadas las excepciones; condenó al reconocimiento y pago de la indexación sobre los valores retroactivos, los cuales se causan desde el momento de exigibilidad y hasta el pago y se abstuvo de la condena en costas.

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

#### **Demandada**

La apoderada interpuso el recurso de apelación, solicitando al superior, se mantenga en la posición que ha asumido en casos idénticos, como en la Sentencia del 03 de junio de 2020, MP Jhon Jairo Acosta Pérez, aplicando las sentencias que sobre el tema ha proferido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como la SL 14096 del 2007 y la SL 3425 del 2008.

Insiste en que lo que se debe acreditar por la parte demandante, es que al momento del fallecimiento de su hija, era ésta quien la sostenía económicamente o que le suministraba una contundente ayuda económica, para proporcionarle un sostenimiento digno, considerando que no se logró probar la subordinación y dependencia, por cuanto es claro que la causante era una persona de apenas veinte años, que solo llevaba laborando cinco meses, que pasaba la mayor parte del tiempo fuera del hogar y pernoctaba en su lugar de trabajo, que era un campamento en una vereda, lo cual permite inferir que la misma tenía unos gastos propios, que le impedían, de acuerdo al monto del ingreso, suministrarle una ayuda económica relevante a su madre.

Afirma que no descarta que la causante diera una ayuda o una colaboración a la madre, pero la misma no pudo establecerse con certeza, ya que ni el testigo del supermercado, ni la demandante, pudieron dar certeza sobre cuál era la contribución económica, de hecho, lo indicado por los mismos fue contradictorio, de cara al ingreso base de cotización.

Respecto al tema de los inmuebles de propiedad de la demandante, aduce que es una prueba que tiene tarifa legal, se trata de una formalidad ad substantiam actus, es decir, se requiere una prueba de esa misma entidad para ser desvirtuada, no pudiendo una prueba testimonial, prevalecer sobre un documento que acredita la titularidad de los bienes, anota que la diferencia que se plantea respecto del documento aportado por Colmena, fechado el día anterior a la audiencia, con el aportado por la actora, no encuentra mérito para que se le dé mayor credibilidad al aportado por la demandante, ya que ambos documentos fueron debidamente expedidos, insistiendo en la carga probatoria que le correspondía a la actora, teniendo toda la capacidad probatoria, para mostrar la compraventa ficticia que hizo con su hermano, la cual puede constituir incluso conducta penal.

Aduce que la demandante no tiene dependientes, así como que la misma tiene un ingreso que a nivel nacional, se considera que la persona no es pobre,

recibiendo la actora, por el alquiler del inmueble \$350.000, sin saber cuánto recibe por otras ayudas, siendo solo los dos últimos testigos, quienes hablan de una colaboración de los otros hijos, desconociendo las razones por las cuales la señora Marina y el señor Jhon Jairo, no se refieren a la existencia de ayudas o de cercanía con los otros hijos, situación que quedó en duda por lo manifestado tanto por el señor Diego como por la señora Gloria Emilce, quienes dijeron que se trataba de una familia unida, que se ayudaba, prueba de ello es que los estudios de Catherine fueron sufragados por su madre y por sus hermanos, lo que hace pensar que la demandante no está en una situación distinta a la que se encontraba antes de que Catherine empezara a trabajar.

En lo referente al ingreso, afirma que le parece muy demostrativo que si bien, la vinculación de Catherine al hospital de Ituango, es por medio de un contrato de prestación de servicios, ésta fue afiliada en calidad de independiente y cuando se hacen las cuentas, a la misma mensualmente le debían quedar \$531.000, de ahí asumía todos sus gastos en el campamento, lo que hace lógico pensar que la causante no podía asumir gastos en dos lugares.

Agrega que la señora Gloria Emilcen, expresó que Catherine recibía dineros en el Banco Agrario, que doña Marina tiene 4 hijos y 11 hermanos, es decir, es un núcleo familiar muy grande, indicando que son personas que progresan, siendo por ejemplo Jhon Jairo, una persona con varios bienes que recibió como herencia o donación y que han permanecido en la familia, siendo personas que, contrario a lo manifestado, tienen la capacidad de tener un inmueble, lo que hace que se excluya de cualquier situación de indigencia.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de las partes. El apoderado de la actora afirmó que las pruebas recaudadas, fueron contundentes para demostrar la relación de dependencia existente entre la demandante y la fallecida, ello por cuanto la reclamante

percibía el 50% del salario mínimo legal, en su trabajo con el ICBF; además, no es cierto la propiedad que tenía la interesada, sobre tres inmuebles, ya que en la audiencia quedó probado que se trató de un favor que le hizo a su hermano; la renuncia de la demandante a su trabajo, obedeció a razones de tipo psicológico y emocional; los ingresos de la causante eran del orden de los \$2.300.000, pero como el contrato era de prestación de servicios, la misma cotizaba sobre el 40%; no es cierto lo relacionado con la autonomía de la demandante, por cuanto se acreditó que sus otros hijos tenían sus propias obligaciones, resaltando que el acompañamiento brindado por la afiliada durante 5 meses a su madre, le sirvieron para mejorar su calidad de vida.

Por su parte, la apoderada de la accionada, afirmó que de las pruebas recaudadas, se puede concluir que la actora, para el momento de la muerte de su hija, estaba laborando, era cotizante activa al sistema de seguridad social en salud, era propietaria inscrita de 3 inmuebles, siendo la misma quien confesó en su interrogatorio, que meses después del fallecimiento de su hija, decidió renunciar a su trabajo, sin poderse olvidar que la demandante era una persona que respondió económicamente por sus 5 hijos, aunado al hecho de que la causante apenas estaba iniciando su vida laboral y del hecho de que los testigos declararon que la afiliada realizaba aportes esporádicos, sin establecerse su cuantía.

Asevera que en cuanto a los bienes que aparecían como propiedad de la reclamante para el momento de la muerte de su hija, no quedó acreditado que los mismos, previamente, eran de propiedad de su hermano. Cita la Sentencia SL 15116 del 2014, en la cual se establecen cómo debe de ser la ayuda que aportaba el afiliado fallecido a sus padres, a efectos de poder hablarse de una dependencia económica, para concluir que el aporte de la fallecida, no cubría ni el 50% de las necesidades básicas de su madre.

## **2. CONSIDERACIONES**

## **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la causante nació el 2 de enero de 1997 y falleció el 5 de septiembre del 2017 –ver folios 19 y 21-.
- La muerte de la afiliada fue calificada como de origen laboral –ver folio 14-.

## **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia objeto de apelación, para en su lugar absolver a la demandada de la obligación de reconocerle la pensión de sobrevivencia a la demandante, verificando para tal fin, si la señora Marina del Socorro Quiroz Tamayo, acredita los requisitos para ser beneficiaria de la misma, en particular, si para la fecha de la muerte dependía económicamente de su hija Catherine Quiroz Tamayo?

## **2.4.- TESIS**



Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual la demandante no lograr acreditar la dependencia económica respecto de su hija Catherine Quiroz Tamayo, y por lo tanto no le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, la Sentencia debe ser REVOCADA.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

Tal y como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 junio de 2009, SL42828 del 1º febrero de 2011, SL 7358 (46780) del 23 junio de 2014.

Por lo anterior, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, norma que, respecto a los beneficiarios de la prestación, hace remisión al contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, disposición que en lo que interesa al proceso establece:

*“ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:*

*Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  
(...)*

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”*

En el caso que concita la atención de la Sala, el punto central de discusión radica en determinar si la accionante, tiene o no la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia de origen profesional, específicamente, en relación

con el requisito de dependencia económica, pues se tiene por demostrados los demás requisitos, como lo son el parentesco y la inexistencia de otros beneficiarios de mejor derecho.

Parte la Sala de la premisa jurídica, de que la dependencia económica, como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C111 de 2006 y lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en innumerables fallos, no requiere ser absoluta, véase al respecto las sentencias CSJ SL400 de 2013, SL816 de 2013, SL 2800 de 2014, SL3630 de 2014, SL6690 de 2014, SL14923 de 2014 y SL6390 de 2016, sin que ello signifique, que no sea necesario que exista una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, de manera que si bien pueden percibir ingresos adicionales, estos deberán ser insuficientes para garantizar la independencia económica.

En sentencia SL 10251 de 2017, de la Sala de Descongestión, se recordó que el aporte del causante debe ser de la entidad suficiente para configurar dependencia:

*“En relación con la acusación presentada en el segundo cargo orientado por la vía directa, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en punto al entendimiento que debe darse al requisito de dependencia económica, puede verificarse que la sentencia de segundo grado, admitió que no se exige que la dependencia sea total y absoluta, sino que tenga la connotación de subordinación respecto de otra persona o la necesidad de auxilio o protección de otra”*

*“Intelección que atiende los planteamientos que sobre este asunto ha sostenido esta Corporación, pues ha sido criterio reiterado, que la dependencia económica se establece en cada caso particular, sin que la misma sea total y absoluta, pues lo que ha de probar es que se derive de una contribución por parte del causante, que se acredite como relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del demandante, y que pueda configurar subordinación económica que se requiere para adquirir la condición.”*

Posición reiterada en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo, radicado SL1243-2019

(68336) del 27 de marzo del 2019, en la que concluyó que la dependencia económica no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, pero tampoco puede entenderse que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “buen hijo”, siempre sea indicativo de una verdadera dependencia económica:

*“Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).*

*Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley...”*

## **2.6.- CASO CONCRETO**

### **En cuanto a la dependencia económica de la demandante, respecto de su hija**

La dependencia económica de los padres respecto de los hijos, como lo ha establecido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, debe ser auscultada en cada caso concreto, sin que existan reglas de comprobación general.

Igualmente es un concepto que está vinculado al mínimo vital cualitativo del padre, de manera que el aporte del hijo, sea determinante para mantener el mismo, con independencia del quantum de los ingresos propios o suministrados por terceros.

En comunicación del 26 de abril de 2018, la demandada indica que, de acuerdo con la investigación realizada, se pudo establecer que la accionante tiene independencia económica, existiendo evidencia de fuentes de ingresos permanentes, suficientes y adicionales a la colaboración económica que le pudiera brindar la causante. Agregó que la causante, estaba afiliada como cotizante en la EPS Medimas, sin beneficiarios y la demandante se encuentra afiliada en calidad de cotizante a la misma EPS; además se constató que la reclamante es propietaria de tres inmuebles de tipo urbano en el municipio de Ituango Antioquia –ver folios 17 a 18-.

Ahora bien, analizada por la Sala la prueba en su conjunto, se concluye que no se encuentra acreditada la dependencia económica de la accionante frente a su hija fallecida, atendiendo a lo siguiente:

En interrogatorio de parte rendido por la demandante, la misma indicó que es viuda, que su esposo falleció hace veintinueve años, que tiene cinco hijos todos mayores de edad, sin tener personas a cargo, que actualmente no labora, dedicándose al cuidado de su madre y de una hermana que están enfermas, viviendo en Sabaneta, siendo sus hermanos los que les ayudan para los servicios y la comida, pagándoles incluso el arriendo, por valor de \$600.000.

Explicó que para septiembre de 2017, cuando fallece su hija, vivía en Ituango, que la afiliada iba a laborar a la Vereda Santa Lucía por veinte días y regresaba a la casa a descansar cinco o seis días, sin tener que pagar nada en la vereda, siendo ella la que le pagó el estudio a Catherine y otra hija le ayudó, pero actualmente sus hijos no le ayudan porque tienen su propia obligación, aclarando que antes de la causante iniciar a laborar, hizo prácticas en el hospital, en donde le pagaban como \$100.000 o \$150.000.

En lo relacionado con la ayuda suministrada por Catherine, adujo la actora, de manera inicial, que le suministraba el mercado y la droga, que le daba por ahí \$1.000.000, posteriormente, afirma que no sabe claramente con cuanto le

ayudaba, ya que no tenía una cuota fija y que era según la necesidad que se tuviera, explicando que cuando Catherine estaba en la vereda, le mandaba la plata o le decía que fuera a mercar de cuenta de ella. Asevera que su hija por su trabajo, tenía que pagar la salud y la pensión por cuenta propia.

En cuanto a la actividad económica, de la madre detalló la interesada que laboraba con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que de ahí le sacaban el dinero para pagar la salud, que para cuando su hija muere, ella aún laboraba, recibiendo \$300.000 por su labor.

En lo atinente a los testimonios recibidos, se debe indicar que ninguno de los testigos, logra precisar con claridad, a cuanto ascendía el aporte que era suministrado por la causante, encontrando por ejemplo cómo el señor GILDARDO ANDRÉS TABARES OSORIO, quien convive desde hace 10 años con Adriana Patricia Correa Quiroz, que es una de las hijas de la demandante, indicó que desde que Catherine comenzó a laborar, se hizo cargo de la manutención y los cuidados de su madre, pagando los servicios, enterándose de eso porque su esposa le contaba y porque lo conversó con Catherine, indicando que era la afiliada, la encargada de pagar las citas médicas con los especialistas para su madre y le daba para los medicamentos que a veces no le eran suministrados por la EPS.

Por su parte, JHON JAIRO QUIROZ TAMAYO, hermano de la demandante, indicó que su hermana dependía de Catherine, que los otros hijos le daban dinero para cualquier gasto imprevisto, pero no tenían una obligación permanente, precisando que en el poco tiempo que Catherine laboró, fue la que respondió por su madre, concluyendo que Catherine sostenía a su madre, porque su hermana ya no laboraba, contradiciendo lo afirmado por la accionante, y los otros hijos se habían ido.

Por su parte los señores GLORIA EMILCEN MORENO HURTADO y DIEGO DE JESÚS MONROY AGUIRRE, quienes habían rendido

declaración extraproceso previo a presentarse la demanda, afirmaron que Catherine vivía pendiente de su madre, siendo la afiliada la que veía por ella, pero ninguno hace referencia al aporte suministrado.

El señor GERMÁN YOANY ESPINAL GUTIÉRREZ, dueño de un autoservicio en Ituango, es la única persona que hace referencia a cifras, explicando que cuando a Catherine la enviaron a la vereda Santa Lucía, fue a su negocio, a pedirle que abasteciera los víveres que su madre necesitara, comentándole en alguna oportunidad, que sus hermanos le dejaron la obligación de su madre a ella y que le estaba quedando muy pesado, afirmando que en comida, la joven afiliada le pagaba \$500.000, \$600.000 u \$800.000, así como que también él le recibía la factura de los servicios a la demandante y se la pagaba, apuntándole esa deuda a la causante, incluso, aseveró que a veces iba a comprarle o reclamarle alguna droga para la demandante, creyendo que Catherine se ganaba como \$2.200.000.

No obstante lo anterior, tanto los dichos de la demandante, respecto a que su hija le daba \$1.000.000 mensual, como lo declarado por el señor Germán Yoany Espinal Gutiérrez, no guardan coherencia con la realidad de la afiliada fallecida, ya que quedó plenamente acreditado, que la misma estuvo afiliada por cuenta del empleador ESE Hospital San Juan de Dios, desde el 12 de abril al 5 de septiembre de 2017, como trabajadora independiente -folio 105-, apareciendo certificación de pagos realizados a la demandada, a favor de la causante y por cuenta de la misma afiliada, por los periodos de abril a agosto de 2017, con un IBC del salario mínimo, sobre treinta días por casa mes, excepto por el primer mes, que se reportan veinte días y un IBC de \$491.812 – folio 103-, por lo que es claro, que los ingresos de la causante, no se compadecen con el valor del dinero que se aduce la misma le suministraría a su madre, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una joven de escasos veinte años de edad, que apenas estaba comenzando su vida laboral, ahora no se aportó al proceso prueba del valor de los honorarios devengados por la

asegurada fallecida, para establecer que estos fueran superiores al salario mínimo.

No puede pasarse por alto, además, el hecho de que reposa en el plenario certificación de pagos realizados a la demandada, a favor de la causante y por cuenta de la empresa Centro de Sistemas de Antioquia S.A.S., por los periodos de octubre de 2015 a abril de 2016, reportando como IBC el salario mínimo, sobre treinta días por cada mes –folio 101-, pero sobre dichos periodos, figura como tipo de trabajador estudiantes Decreto 055 del 2015 –folio 104-, lo que coincide con lo narrado por la demandante en su interrogatorio, consistente en que su hija, previo a iniciar a laborar al servicio del Hospital San Juan de Dios, realizó sus prácticas.

Así mismo, fue anexada la investigación ordenada por la demandada, la cual fue realizada por Coinsetec Ltda., en la que se indicó, que la causante era auxiliar de enfermería, que el domicilio era en el municipio de Ituango, que la causa del fallecimiento fue un accidente de tránsito, informándose que la afiliada, se transportaba en una ambulancia de la Cruz Roja hacía el puesto de salud de la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango y se produjo un accidente de tránsito que le produjo la muerte. Se adujo que la causante era soltera y no tenía hijos, que vivió con su madre en Ituango hasta cuando se trasladó a la vereda Santa Lucía, para desempeñar su cargo de auxiliar de enfermería, a partir de abril de 2017.

En la misma investigación, se indicó que en el sector donde vivió la causante y su madre, entrevistaron a varios vecinos que coinciden en indicar que la afiliada fallecida era soltera, que no tuvo hijos, que siempre vivió con su madre en la casa de ella ubicada en la calle Santa Bárbara, que laboró en el hospital del pueblo y en los últimos 4 meses en el puesto de salud de la vereda Santa Lucía, pero que la afiliada se mantenía yendo y viniendo y le colaboraba económicamente a su madre sin indicar el valor de la colaboración.

En la misma diligencia, declararon los señores Flor María Campuzano Guamán, Yuli Andrea Valle Morales y Juan Esteban Ramírez Bedoya, quienes indicaron que Catherine Quiroz era soltera, no tenía hijos, que ayudaba económicamente a su madre, pero tampoco conocen el monto del aporte cuanto ascendía el aporte suministrado por la causante.

Ahora, la demandante para la fecha del fallecimiento de su hija era propietaria de tres inmuebles ubicados en el Municipio de Ituango, de conformidad con el documento expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, fechado el 21 de marzo del 2018 y expedido a raíz de la reclamación de la prestación hoy debatida, a nombre de la demandante se encuentran 3 propiedades, así –ver folio 114:

- Matrícula 7710, calle Santa Bárbara, edificio Quiroz Tamayo, propiedad horizontal, apartamento 101 No. 21-27
- Matrícula 7448, Carrera Ruíz, edificio Quiroz, propiedad horizontal, apartamento 101
- Matrícula 7449, Carrera Ruiz, edificio Quiroz, propiedad horizontal, casa 101

Sobre este tema, la demandante indicó que de su propiedad solo es la casa donde vivía con Catherine, que queda en la calle Santa Bárbara, aclarando que no es un edificio, sino que es una casa que fue una herencia de su padre, presentando confusión con el hecho de que en el certificado de propiedad, se indique que se trata del edificio Quiroz Tamayo, lo cual no logra explicar, agregando que los otros bienes que aparecen como suyos, en realidad son de su hermano Jairo Quiroz, quien se los escrituró para salir de un problema que tenía con su esposa, pero que ella se los devolvió, el día anterior a la audiencia, sin embargo, la apoderada de la demandada, aporta consulta realizada en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro observándose que con el número de la cédula de la reclamante, continúan figurando tres propiedades, agregando la interrogada, que no recuerda que escritura hicieron para



devolverle las casas a su hermano, así como que las mismas, las tuvo a su nombre por ahí un año más o menos, lo cual tampoco resulta cierto, atendiendo a las fechas de las consultas aportadas por la parte accionada, agregando la interrogada que el llamado edificio Quiroz es de su hermano, pero que tampoco es edificio, sino apartamentos, afirmando que actualmente tiene su casa arrendada en \$350.000.

Por su parte y sobre esta misma situación, declaró el señor JHON JAIRO QUIROZ TAMAYO, hermano de la hoy demandante, quien expresó que respecto de los dos bienes que aparecen a nombre de la demandante y que la misma aduce no son de su propiedad, lo que sucedió fue que en algún tiempo, él tuvo una compañera, pero hicieron liquidación conyugal, teniendo problemas económicos, entonces él le pasó a su hermana esos bienes, por medio de una venta, pero no le entregó dinero alguno por ese favor, indicando que se trata de una casa y de una pieza que a veces la alquila y él recibe \$150.000, pero otras veces se utilizaba para guardar cualquier cosa, aclarando que ya se hizo el traspaso a su nombre, bienes que son una herencia de sus abuelos, tratándose de una casa grande que dividieron en dos, haciéndole un subterráneo pequeño y sacando una habitación.

Frente a lo anterior, no se aporta documento privado que dé cuenta de la compraventa ficticia que se realizó entre la actora y su hermano, ni la escritura pública por medio del cual pasaron a su haber, esas dos propiedades que se aduce, en realidad, son del señor Jhon Jairo Quiroz Tamayo, ni los certificados de tradición, ni el acto mediante el cual se efectuó nuevamente el traspaso, teniendo en cuenta que para el momento de la consulta realizada por la demandada las propiedades figuraban a nombre de la demandante y permanecieron así para la fecha de la audiencia, por consiguiente, le asiste razón a la parte apelante en cuanto afirma que jurídicamente los inmuebles son de propiedad de la demandante, admitiendo el hermano de la actora que por lo menos uno de ellos se encuentra arrendado.

Bajo el anterior panorama, no es posible tener acreditada la dependencia económica parcial de la demandante frente a su hija, en primer lugar, porque no se demostró el aporte de la asegurada fallecida, para determinar que se trataba de un valor relevante y subordinante, más aun teniendo en cuenta que los ingresos acreditados de la misma corresponden al salario mínimo legal y que solo alcanzó a laborar por un periodo mínimo de cinco meses, en segundo lugar, porque la demandante percibía también ingresos de medio salario mínimo mensual, como madre sustituta del ICBF, para el momento del fallecimiento de su hija y tenía mínimamente garantizada la vivienda y la cobertura en salud, además de tener dos propiedades más en el Municipio de Ituango, una de ellas arrendada.

Al respecto debe tenerse presente, que la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática en señalar que la contribución del hijo a sus padres debe ser cierta, constante y significativa, a fin de que constituya un verdadero soporte o sustento económico y no el simple aporte del buen hijo. (Sentencia SL 3980-2020).

Resulta, igualmente pertinente anotar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene precisado, de tiempo atrás, que la finalidad de la pensión de sobrevivencia no es elevar el nivel de vida, superar la pobreza de los beneficiarios o acrecentar su patrimonio, sino superar el desamparo generado por la supresión de la ayuda del causante, conforme a ello, lo relevante no es establecer la necesidad económica del otorgamiento de la prestación, sino el aporte real y relevante del causante, véase sentencias SL, Radicado 21369, del 19 de marzo de 2004, y SL, Radicado 35991 del 15 de febrero de 2011, última en la que se recordó:

*“En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades*

*económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento.”*

Por las razones anteriores, la sentencia debe ser revocada. Costas en ambas instancias a cargo de la accionante.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de noviembre del dos mil veinte, en el proceso ordinario instaurado por la señora MARINA DEL SOCORRO QUIROZ TAMAYO en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. y en su lugar se **ABSUELVE** a la demandada de todas las pretensiones instauradas en su contra por la actora.

2.- Costas en ambas instancias a cargo de la accionante, en esta instancia se fijan agencias en derecho en la suma de \$908.526 pesos

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior queda notificados a las partes por ESTADOS, de conformidad con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

La presente providencia fue notificada por estado No. **69** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 26 de abril de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario